

DIVORCIO. PENSIÓN COMPENSATORIA. La madre tiene 60 años y durante 39 años se ha dedicado al cuidado del hogar. El padre solicita la denegación y la madre la concesión, la audiencia la concede diciendo a

A la **hora de decidir sobre el establecimiento de una pensión compensatoria**

- no es relevante el patrimonio ganancial que, en principio, corresponde en un 50 % a cada cónyuge, ya que lo que trata de compensar con la referida pensión es el desequilibrio económico que puede producirse por causa del divorcio.
- los bienes que puedan corresponder a la actora por la **herencia** de su madre tienen escaso valor

y en este caso la concede porque

- no consta tenga ingresos para su sustento más allá de la escasa cantidad que pueda potencialmente corresponderle por la herencia de su madre
- y que durante el matrimonio, que ha durado 39 años, se ha dedicado de forma principal a atenciones de la familia (en mayor medida que el otro progenitor que sí ha tenido trabajo de forma continuada) y, de forma solo temporal y esporádica, a colaborar en la actividad empresarial de su cónyuge.

En consecuencia, **es precisamente la ruptura matrimonial lo que genera el desequilibrio y determina una disparidad económica entre los cónyuges**

A además hay una sociedad, en la que mujer es socia formal. Hay 2 sociedades ANADOS Y FARMATEC, que tienen vínculos comunes, lo cual demuestra los socios de ambas sociedades, el objeto social y la asesora contable que es la misma en ambas empresas, y la numerosa documentación que ha aportado pese a decir que no sabía ni pertenecía a dicha sociedad.

Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 17 enero 2022. Número Sentencia: 9/2022 Número Recurso: 337/2021 Jurisdicción: Civil Ponente: [FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA](#) .Origen instancia 10

Cabecera: Desequilibrio economico del conyuge. Divorcio contencioso. Disolucion de la sociedad de gananciales

Por la representación procesal se formula recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 02/03/2021 por el juzgado de primera instancia número 10, **procedimiento de divorcio contencioso** 940/2018, que decreta el divorcio de los cónyuges y, entre otras medidas, establece pensión compensatoria a cargo del hoy recurrente de 850 euros / mes.

A la luz de este doctrina, la **existencia de un desequilibrio económico entre los esposos** en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica, sin el cual no es posible el reconocimiento de la pensión compensatoria.

Jurisdicción: Civil

Ponente: [FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 17/01/2022

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 9/2022

Número Recurso: 337/2021

Numroj: SAP VA 6:2022

Ecli: ES:APVA:2022:6

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00009/2022

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 **Fax:** 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSV

N.I.G. 47186 42 1 2018 0017107

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000337 /2021

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000940 /2018

Recurrente: Cipriano

Procurador: FERNANDO RUIZ LOPEZ

Abogado: HORACIO MIGUEL PARRILLA LEOZ

Recurrido: Almudena

Procurador: MARIA DOLORES DIAZ-ALEJO RODRIGUEZ

Abogado: MARIA JESUS VIÑA HERNANDEZ

SENTENCIA num. 9/2022

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

D. FRANCISCO SALINERO ROMAN

D. JOSE RAMON ALONSO-MAÑERO PARDAL

En VALLADOLID, a diecisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de Divorcio Contencioso núm. 940/18 del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valladolid, seguido entre partes, de una como **DEMANDANTE-APELADA** Dña. Almudena, representada por la Procuradora Dña. MARÍA DOLORES DÍAZ-ALEJO RODRÍGUEZ y defendida por la letrada Dña. MARÍA JESÚS VIÑA HERNÁNDEZ, y de otra como **DEMANDADO-APELANTE** D. Cipriano, representado por el Procurador D. FERNANDO RUIZ LÓPEZ y defendido por el letrado D. HORACIO MIGUEL PARRILLA LEOZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 02/03/2021, se dictó sentencia cuyo fallo dice así:

"Se declara disuelto por DIVORCIO, el matrimonio formado por Dª Almudena y D. Cipriano celebrado en Valladolid el día 20 de diciembre de 1980 con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.

1º.-Cesa la presunción de convivencia conyugal.

2º.-Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a favor del otro, y cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica y disuelta la sociedad de gananciales.

ADOPTO COMO MEDIDAS:

1.-En concepto de pensión compensatoria D. Cipriano pagará a Dña. Almudena la suma de 850 euros mensuales dentro de los cinco primeros días de cada mes que ingresará en la cuenta que esta designe y se actualizará anualmente conforme al IPC.

Esta pensión se devengará desde la fecha de esta resolución sin establecerse límite temporal.

2.-Se atribuye a Dª Almudena el uso de la vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000, piso NUM001 de Valladolid, y a D. Cipriano el uso del chalet sito de la CALLE001 nº NUM002, (Urbanización DIRECCION000) en Arroyo de la Encomienda, (Valladolid).

Y dada la disparidad de valor de los inmuebles, cada parte pagará los gastos de propiedad y uso de su vivienda hasta que en el proceso de liquidación se efectúen las cuentas correspondientes.

No se hace expresa imposición de costas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de D. Cipriano, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 02/11/2021, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrado-Ponente el **Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO.

Por la representación procesal de Cipriano se formula recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 2-3-2021 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 10, PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO CONTENCIOSO 940/2018 , que decreta el divorcio de los cónyuges y, entre otras medidas, establece pensión compensatoria a cargo del hoy recurrente de 850 €/mes.

En síntesis, **la parte apelante apela la sentencia por entender** que incurre en error en la valoración de la prueba sobre:

1. La condición de empresaria de la esposa y, por consiguiente, sobre su formación o cualificación profesional.
2. La dedicación de la esposa al cuidado de los hijos, que ha de considerarse análogo al prestado por el marido ya que ambos trabajaban fuera de casa.
3. La saneada situación económica o patrimonial de la esposa, que viene dada por los por su parte en el patrimonio ganancial y una herencia que ha recibido de su madre.
4. La situación económica y laboral del esposo.

La parte apelada se opone al recurso de apelación formulado de contrario e interesa la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos, añadiendo que la sociedad ANADOS, sobre la que el marido apoya su alegato acerca de la condición de empresaria de la esposa, es una sociedad cuya propiedad y gestión real corresponde del marido y a su socio en la entidad FARMATEC, en la que aparecen como socias tapadera las esposas de ambos.

SEGUNDO.-SOBRE EL SUPUESTO ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ACERCA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA ACTORA.

Es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002).

La aplicación al supuesto enjuiciado del anterior criterio jurisprudencial sobre valoración de prueba ha de llevar necesariamente a este Tribunal de Apelación a la misma conclusión que la obtenida por la Juez de Instancia, cuyos acertados razonamientos expresamente se aceptan, asumen y hacen enteramente propios, dándoles íntegramente por reproducidos al objeto de evitar innecesarias repeticiones, ya que lejos de incurrir el juzgadora "a quo" en error de valoración o interpretación probatoria, se lleva a cabo en la resolución recurrida un más que detallado y suficiente examen de la cuestión objeto de controversia que llevan a dicha Juzgadora a una conclusión que este Tribunal comparte plenamente, sin que pese al esfuerzo argumental del recurso puedan servir los alegatos de la parte apelante al pretendido efecto de sustituir el imparcial, lógico, recto y objetivo criterio de la Juez de Instancia por los muy legítimos pero subjetivos, parciales e interesados de la parte aquí apelante.

En todo caso, y al solo objeto de dar una más cumplida contestación a los términos del recurso de apelación que ha sido interpuesto debe señalarse, a mayor abundamiento de lo que de manera detallada y pormenorizada se explicita en la resolución recurrida, que no puede apreciarse por este Tribunal que incurra la Juzgadora de Instancia en infracción legal alguna que justifique la pretendida revocación de la decisión que ha sido adoptada en la resolución que se impugna, dado que de lo actuado, probado y obrante en autos se constata una más que suficiente justificación probatoria que corrobora la decisión adoptada en la resolución recurrida.

En particular, **esta Sala comparte el juicio probatorio de la Juez de instancia en el** sentido de que detrás de la sociedad ANADOS estaban el demandado y su único socio en la entidad FARMATEC, Sr. Raimundo, aunque formalmente aparecieran como socias sus respectivas esposas.

No resulta creíble el desconocimiento del demandado de todo lo relativo a la sociedad ANADOS. El demandado llega a manifestar como peregrina razón de tal desconocimiento que nunca habla de negocios en casa. Ello unido a una **insistencia, que parece preconcebida,** en el hecho obvio de que no figura como socio de ANADOS como explicación de que nada puede saber por ello de dicha entidad, ni de quién la gestiona realmente, **suscita a esta Sala dudas sobre la credibilidad de tal versión de hechos.**

Pero existen además otros datos indiciarios que acrecientan dichas dudas:

1. El Sr. Raimundo, socio del demandado en FARMATEC, figura también como socio fundador en ANADOS con un 1% de las acciones en la constitución de la sociedad, lo que apunta a la existencia de una vinculación personal y societaria entre la primera y la segunda sociedad.
2. ANADOS tiene por objeto social la comercialización y distribución de productos de parafarmacia y otros que no se pueden vender en una ortopedia. Así consta por conformidad de partes. Ello apunta a la creación de ANADOS para dar cobertura a una expansión del negocio que no podía amparar FARMATEC.
3. La Sra. Ofelia, a sueldo desde hace años de FARMATEC como asesora y contable, es la misma profesional que lleva las cuentas y demás operaciones societarias de ANADOS, lo que supone una nueva conexión personal y societaria entre FARMATEC y ANADOS.
4. El demandado, que por un lado afirma no saber nada de ANADOS ni de su gestión, posee, sin embargo, y ha aportado a los autos variados documentos de la vida societaria de ANADOS, lo que apunta a que la relación del demandado con ANADOS es distinta y más estrecha que la que sostiene en su recurso.

A la vista de esos datos indiciarios y de que la **mera mención formal en una escritura de constitución** no constituye a la actora en empresaria y, menos aún, en una comercial preparada para acceder al mercado laboral, al demandado que sostiene tal extremo le correspondía probar tal aserto.

Pero **se ha limitado a aportar una serie de documentación societaria de orden interno y formal que en ningún momento prueba** la realización material por parte de la actora de actos empresariales o comerciales de los que se desprenda una condición profesional que facilite su acceso al mercado laboral.

Resulta significativo por ello que el demandado **no haya llamado** a declarar a los que fueron socios con la actora de la sociedad ANADOS: el Sr. Raimundo, socio del demandado en FARMATEC (cuyo testimonio fue propuesto y admitido, y al que

renunció la parte en el acto de la vista), y su esposa, que podrían haber dado cuenta de la condición empresarial o profesional de la actora.

Resulta también significativo que, pese a estar en poder de documentación sobre ANADOS, **no haya aportado** el demandado documentos relativos a operaciones comerciales con terceros - y no de orden meramente societario interno- en los que haya intervenido la actora como empresaria o comercial.

TERCERO.-SOBRE EL SUPUESTO ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTORA.

De nuevo debemos hacer nuestra la valoración probatoria de la Juez de instancia sobre la situación económica de la actora.

A la **hora de decidir sobre el establecimiento de una pensión compensatoria** no es **relevante el patrimonio ganancial** que, en principio, corresponde en un 50 % a cada cónyuge, ya que lo que trata de compensar con la referida pensión es el desequilibrio económico que puede producirse por causa del divorcio.

Sentado lo anterior, **basta la mera lectura de los datos obtenidos a través del punto neutro judicial para llegar a la misma conclusión que la Juez a quo:** los bienes que puedan corresponder a la actora por la **herencia** de su madre tienen escaso valor y no van a permitir a la misma mantener un nivel económico análogo al que mantuvo constante el matrimonio.

De dicha lectura se desprende:

a. Que sólo le corresponde el 25% de dichos bienes (el resto les corresponde a sus tres hermanos).

b. Que las 30 fincas rústicas que forman parte de la herencia, con independencia de que no conste en la mayor parte de ellas su superficie, tienen un valor muy escaso atendiendo a su valor catastral.

No existe la "notoriedad" de la que habla la parte apelante, ni fundamento legal alguno para concluir, como lo hace la parte demandada, que el "valor catastral" que publica el Catastro es el valor del m² y no el valor total de la finca.

c. Que las tres fincas urbanas, dos de ellas naves industriales en la localidad de Crémenes, la tercera un piso de 75 m² en Valladolid tienen un valor catastral

sumado de 32.789,29 € que, dividido entre cuatro, arroja un valor de 8.197,32 € que en principio le corresponderían a la actora.

Debe tenerse en cuenta, además, que todos estos valores son valores teóricos cuya materialización en dinero disponible para la actora exigiría encontrar compradores y consumir actos de venta.

No constan otras ingresos o bienes de la actora.

CUARTO.- SOBRE SOBRE EL SUPUESTO ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DEMANDADO.

Tampoco apreciamos error en la valoración de la prueba realizada por la Juez de instancia sobre la situación económica del demandado.

Hay que partir de la base de que el informe aportado por el demandado realizado por la Sra. Ofelia **no es un informe pericial, sino una prueba testifical-pericial** que debe ser contemplada con la debida cautela porque ha sido elaborado por la asesora contable y fiscal a sueldo de la sociedad de FARMATEC desde hace años, de la que es socio y administrador el demandado.

Por el contrario, **el informe pericial aportado por la parte actora** revela que a fecha de la demanda de divorcio (año 2018) el demandado,

- entre sueldo (2.053,88 €), extras y pagos en especie percibió unos ingresos de 48.933,70 €, o lo que es lo mismo 4.077,80 €,
- a los que habría que sumar el ingreso en especie por el uso y disfrute particular de un coche de empresa.

Y que, aunque reconoce la disminución de los ingresos de FARMATEC en 2019, apunta que también se redujeron en **mayor medida los gastos**, que por ello sigue habiendo ganancias y **que no ha encontrado en la documentación societaria acta que recoja el acuerdo de los socios de bajarse el sueldo en contra de lo que sostiene la parte demandada.**

QUINTO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en múltiples ocasiones sobre el problema de la procedencia de la pensión compensatoria y la cuestión de la temporalidad o el carácter vitalicio de la misma. Como ya dijo esta Sala en su sentencia de 18-5-2015:

En la STS 22-6-2011 declara:

"- El art. 97 CC según redacción introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio, regula el derecho a la pensión compensatoria como una prestación singular, con características propias, notoriamente alejada de la prestación alimenticia - en cuanto que, a diferencia de esta, no atiende al concepto de necesidad, razón

por la que ambas resultan compatibles (SSTS de 2 de diciembre de 1987 y 17 de julio de 2009 (RC núm. 1369/2004)- pero también de la puramente indemnizatoria o compensatoria -entre otras razones, porque el artículo 97 CC no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación (STS de 17 de julio de 2009) y porque no se compadece con su carácter indemnizatorio que sea posible su modificación a consecuencia de una alteración sustancial y posterior en la fortuna de uno y otro cónyuge y, por supuesto, su extinción -, que responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico, producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio (no en la nulidad matrimonial), siendo su finalidad restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre estos.

- Según aclara la citada jurisprudencia, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. De esto se sigue que, a diferencia de la pensión alimenticia, en la compensatoria no hay que probar la existencia de necesidad, toda vez que, como se ha dicho, el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo.. Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfrutaba el otro cónyuge.

- En sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.

-La expresada naturaleza y función de la pensión compensatoria obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción, factores numerosos, y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que enumera el artículo 97 CC . Estos factores o circunstancias tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión (STS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.º 52/2006], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007] y 14 de

febrero de 2011 [RC n.º 523/2008]). *Por último, operan también estos factores para poder fijarla con carácter vitalicio o temporal, pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio. Para este juicio prospectivo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.*

[...] A la luz de esta doctrina, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica, sin el cual no es posible el reconocimiento de la pensión compensatoria. Los dos puntos de referencia obligada son el momento de la ruptura -que ha de servir para comparar las situaciones económicas vigentes hasta ese instante con las posteriores- y el elemento personal, -pues lo que se han de comparar son las situaciones personales de ambos cónyuges referidas a ese momento-.

[...] no puede obviarse el hecho de que, privada la pensión compensatoria del componente asistencial, lo que legitima que el cónyuge más desfavorecido por la situación de desequilibrio económico producida por la ruptura, pueda instar su compensación mediante una pensión a cargo del cónyuge menos desfavorecido, es que tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, razón por la que la pensión, de concederse, deberá fijarse en cuantía y duración suficiente para restituir a este en la situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial''.

Por su parte, la STS de 4 de diciembre de 2012 se dice :

"Como el desequilibrio que constituye presupuesto para su reconocimiento y que tales factores contribuyen a apreciar, ha de entenderse como un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, al constituir finalidad legítima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden

dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

Esta configuración legal y jurisprudencial de la pensión compensatoria obliga, por tanto, a que se tome en cuenta lo ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, como se establece en el referido precepto, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, su situación anterior al matrimonio y las posibilidades reales que tienen de trabajar y atender por sí mismos sus necesidades, si bien no excluye el reconocimiento del derecho, siquiera por un plazo determinado, en supuestos en que ambos cónyuges trabajan y obtienen ingresos o, en los casos en que su edad, salud y cualificación profesional permiten presumir que se encuentran en disposición de tener esa independencia económica, pues lo que se compensa, como ha quedado dicho, es el sacrificio o pérdida que para el cónyuge más desfavorecido derivó de esa mayor dedicación a la familia, en cuanto conste probado que esa dedicación le impidió acceder a legítimas expectativas o derechos económicos que podría haber obtenido por su formación. Es decir, la mera independencia económica de los esposos no descarta la existencia de una situación de desequilibrio si los ingresos de uno y otro son absolutamente dispares y dicha disparidad es consecuencia de aquella pérdida y no de una diferente cualificación o experiencia profesional".

Finalmente, las STS de 17 de Mayo de 2013 y 16 de Julio de 2013 declaran:

" El artículo 97 del Código Civil exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria . En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 de Enero . La pensión compensatoria - declara- "pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá de tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujeto los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función:

a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.

b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión . A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:

a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria .

b)Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.

c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal".

A la **luz de esta doctrina jurisprudencial y** de las respectivas situaciones económicas de los ex cónyuges debemos concluir que la ruptura matrimonial ha causado un manifiesto desequilibrio para la esposa

- que no consta tenga ingresos para su sustento más allá de la escasa cantidad que pueda potencialmente corresponderle por la herencia de su madre
- , y que durante el matrimonio, que ha durado 39 años, se ha dedicado de forma principal a atenciones de la familia (en mayor medida que el otro progenitor que sí ha tenido trabajo de forma continuada) y, de forma solo temporal y esporádica, a colaborar en la actividad empresarial de su cónyuge.

En consecuencia, **es precisamente la ruptura matrimonial lo que genera el desequilibrio y determina una disparidad económica entre los cónyuges.** Así, mientras el esposo sigue teniendo ingresos continuados y estables derivados de su trabajo, la esposa no cuenta con ningún ingreso distinto del de la herencia de su madre.

La fijación de la pensión compensatoria resulta, pues, procedente, y también resulta procedente y ajustada la cuantía fijada por la Juez de instancia, que se encuentra dentro de la parte baja de la horquilla o porcentaje (entre el 20% y el 30%) de los ingresos del obligado al pago aplicado por esta Sala en casos análogos.

SEXTO.- SOBRE LA TEMPORALIDAD DE LA PENSIÓN.

La STS de 20-07-2011 dice:

"La posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias, es en la actualidad una cuestión pacífica , tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 [RC n.º 531/2005 y RC n.º 2650/2003], 21 de noviembre de 2008 [RC n.º 411/2004], 29 de septiembre de 2009 [RC n.º 1722/2007], 28 de abril de 2010 [RC n.º 707/2006], 29 de septiembre de 2010 [RC n.º 1722/2007], 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008]) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero de 2005 y 28 de abril de 2005 -a las que hace alusión para acreditar el interés casacional- como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio, que ha dado una nueva redacción al artículo 97 CC , estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso , particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.º 52/2006], luego reiterada en SSTs de 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008], entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión) que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

En la misma línea, las SSTs de 9 de octubre de 2008 [RC n.º 516/2005] y 17 de octubre de 2008 [RC n.º 531/2005], 28 de abril de 2010 [RC n.º 707/2006] y 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007], afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión , ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CCv y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia ''.

Esta Tribunal de apelación viene admitiendo ordinariamente pensión compensatoria sin límite temporal en supuestos como el de litis en los que el beneficiario de la misma

- tiene una edad avanzada (60 años),
- carece de cualificación profesional que facilite a su edad el acceso al mercado laboral y a la posibilidad de generar una pensión contributiva, y cuando el matrimonio ha tenido una duración extensa (39 años).

Por todas las anteriores consideraciones, procede desestimar el recurso de apelación planteado.

SÉPTIMO.- COSTAS.

De conformidad con los arts. 398 y 394 de la LEC., procede condenar en costas al apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la potestad jurisdiccional que la Constitución Española nos concede.

FALLO:

Que, **desestimando** el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Cipriano contra la sentencia dictada en fecha 2-3-2021 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 10, PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO CONTENCIOSO 940/2018, debemos confirmar y confirmamos la expresada sentencia en todos sus pronunciamientos, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.